JUZGADO VEINTICINCO CIVIL DEL CIRCUITO

Bogotá D.C., diecisiete de mayo de dos mil veintitrés.

Acción de Tutela No. 110013103 025 2023 00229 00.

Resuelve el Juzgado la acción de tutela formulada por JESSICA ANDREINA CONTRERAS ROJANO contra la REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL;

1. ANTECEDENTES

1.1. JESSICA ANDREINA CONTRERAS ROJANO promovió acción de tutela para que se protejan los derechos fundamentales que adelante se enuncian, y en consecuencia solicitó:

“PRIMERO: DECLARAR como vulnerados mis derechos fundamentales al debido proceso, a la nacionalidad, a la defensa, a la imparcialidad, al trabajo, a la igualdad y a la debida notificación”

“...SEGUNDO: ORDENAR a la Registraduría Nacional del Estado Civil rehacer la actuación administrativa que culminó con la expedición de la Resolución No.14507 del 25 de noviembre del 2021, con el objeto de que se agote todos los mecanismos eficaces de notificación y yo, JESSICA ANDREINA CONTRERAS ROJANO pueda ser oído por la autoridad competente para la determinación de mis derechos a la personalidad jurídica, a la nacionalidad y al estado civil...”

“TERCERO: En consecuencia, DEJAR SIN EFECTOS (i) la resolución por medio del cual se anuló el registro civil de nacimiento. Lo anterior, hasta el momento en que la Registraduría Nacional del Estado Civil culmine la actuación administrativa de que trata el ordinal segundo de la parte resolutive de esta sentencia...”

“CUARTO: ORDENAR a la Registraduría Nacional del Estado Civil que, proceda a notificar a las entidades competentes, tales como entidades financieras y el registro nacional, de la validez de mi cédula de ciudadanía...”

1.2. Como fundamento fáctico relevante expuso, en resumen que, es ciudadana venezolana de nacimiento, y que gracias a que su señora madre JUANA ANTONIA ROJANO DE CONTRERAS es colombiana, fue posible que se le reconociera la nacionalidad colombiana. Por tanto, su cédula de ciudadanía fue expedida el 15 de enero del 2014 en Suán - Atlántico.

A pesar lo anterior, su cédula fue cancelada por la REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, procedimiento del que no fue notificada por ningún medio.

A mediados del mes de mayo de 2022, cuando solicito la apertura de una cuenta de nómina para que le fuera depositado su salario en el banco Scotiabank Colpatría, le comunicaron que su cédula había sido cancelada dos meses atrás.

Su Registro Civil de Nacimiento se realizó con la presentación de dos testigos, pero, a la fecha, la Registraduría exige que este registro se encuentre apostillado. Sin embargo, debido a la situación socioeconómica por la cual tuvo que salir de Venezuela, persiste, y que no cuenta con los medios económicos para hacerlo, es imposible cumplir con este requisito.

1.3. Asumido el conocimiento de la presente causa, se dispuso oficiar a la accionada, a fin de que rindiera un informe detallado sobre las manifestaciones contenidas en el escrito de tutela, y, asimismo, remitieran copia de la documentación que para el caso en concreto correspondiera.

1.4. Dentro del término concedido, la REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, a través del Jefe de su Oficina Jurídica, manifestó que mediante la Resolución No. 7300 de 2021 de la Registraduría Nacional del Estado Civil se estableció el procedimiento conjunto de anulación de registros civiles de nacimiento y la consecuente cancelación de cédulas de ciudadanía por falsa identidad, respetando los principios de buena fe, derecho a la defensa y debido proceso, igualdad, imparcialidad, moralidad, participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad.

Indico que como consecuencia del procedimiento antes mencionado se realizó un cruce de datos con los registros civiles de nacimiento extemporáneos que presentaban alguna de las causales de nulidad contempladas en el Decreto 1260 de 1970; en ese sentido respecto el registro civil de nacimiento con indicativo serial 54120794, con fecha de inscripción del 14 de enero del 2014 a nombre de JESSICA ANDREINA CONTRERAS ROJANO se inició la actuación administrativa tendiente a determinar su anulación, y la correspondiente cancelación de la cédula de ciudadanía No.1.043.611.369 expedida con base en ese documento.

Afirmo que contra la Resolución No. 14507 de 25 de noviembre de 2021 no se presentaron recursos en el término procesal, por tal razón, el acto administrativo en cuestión quedó ejecutoriado el 04 de enero de 2022, motivo por el cual no procede la revocatoria directa de la Resolución No. 14507 de 25 de noviembre de 2021, toda vez que se evidencia que se garantizó el debido proceso, no se presentaron los recursos de ley y el acto administrativo quedó ejecutoriado,

como ya se indicó el 04 de enero de 2022, y habiendo transcurridos más de cuatro meses, sin que el interesado hubiera acudido ante la autoridad judicial, a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, opera la figura de caducidad, conforme al artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, en consonancia con lo dispuesto en el artículo 94 del mismo Código, se itera, no procede revocatoria directa.

Finalmente informa que como quiera que la anulación del registro civil con serial No. 54120794 se fundamentó en vicios formales, en cumplimiento de los requisitos que establece el Decreto 356 de 2017 y sus normas complementarias, JESSICA ANDREINA CONTRERAS ROJANO puede inscribirse nuevamente en el registro civil de nacimiento conservando su NUIP 1.043.611.369. En consecuencia, la Dirección Nacional de Registro Civil y la Dirección Nacional de Identificación profirieron la Resolución No. 9518 del 5 de mayo de 2023, “Por medio de la cual se permite una inscripción de nacimiento extemporáneo, y se restablece temporalmente la vigencia de la cédula de ciudadanía No. 1.043.611.369”. Resolución que afirma le fue debidamente notificada al accionante mediante correo electrónico enviado a la dirección que aportó en la presente acción de tutela.

2. CONSIDERACIONES

2.1. La Constitución Política en su artículo 86 estableció la acción de tutela, con el objeto de que toda persona pueda reclamar en todo tiempo y lugar, mediante un procedimiento breve y sumario la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública, o de particulares en casos excepcionales.

El presente trámite se inició, principalmente por la presunta vulneración a los derechos a la personalidad jurídica y debido proceso, que al verse conculcados, transgrede los demás derechos indicados en el escrito de tutela.

Pues bien, de acuerdo con el artículo 14 de la Carta, «*Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica.*». En igual sentido, lo han señalado normas del Derecho Internacional como la Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 6º), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y

Políticos (canon 16) y la Convención Americana de los Derechos Humanos (precepto 3º)¹.

Sobre este particular, la jurisprudencia constitucional, desde la Sentencia T-485-1992, ha establecido que el derecho a la personalidad jurídica, *«presupone toda una normatividad jurídica, según la cual todo hombre por el hecho de serlo tiene derecho a ser reconocido como sujeto de derechos, (...)»*.

En sentencia STP-10941-2017 del 25 de julio de 2017, la Corte Suprema de Justicia sostuvo:

“(...) este derecho de permitir a la persona natural ser titular de derechos y ser sujeto de obligaciones «comprende, además, la posibilidad de que todo ser humano posea, por el simple hecho de existir e independientemente de su condición, determinados atributos que constituyen la esencia de su personalidad jurídica e individualidad como sujeto de derecho. Dichos atributos son la capacidad de goce, el patrimonio, el nombre, la nacionalidad, el domicilio y el estado civil». (CC T-729-2011).

(...)

En relación con el referido atributo de la personalidad jurídica y del libre desarrollo de la personalidad, la Corte Constitucional ha dicho que aquella institución no se agota en la facultad del individuo de ser sujeto de derechos y obligaciones, sino que comprende una serie de propiedades inherentes a la persona que la distinguen, identifican y singularizan (CC T-1033-2008 y CC T-109-1995).

Por otro lado, el registro civil de nacimiento es el instrumento que permite el ejercicio de los derechos civiles de las personas y, además, en él se «inscribe todo lo relacionado con el estado civil de las personas, por lo que el legislador estableció unos trámites precisos para modificar o alterar estos documentos.» (CC T-678-2012).

La importancia de ese documento en el ejercicio del derecho a la personalidad jurídica se vislumbra en la medida que es el medio idóneo para probar el estado civil de una persona desde el nacimiento hasta la muerte, aunado que a través de él las personas adquieren oficialmente otro de los atributos de la personalidad, como es el nombre. (CC T-277-2002).

Así mismo, en pronunciamiento CC C-511-1999 se afirmó que dicho instrumento representa en nuestra organización jurídica «un instrumento de vastos alcances en el orden social, en la medida en la que se considera idónea para identificar cabalmente a las personas, acreditar la ciudadanía y viabilizar el ejercicio de los derechos civiles y políticos.». En ese sentido, «No cabe duda que la cédula de ciudadanía constituye un documento al que se le atribuyen alcances y virtualidades de diferente orden que trascienden, según la Constitución y la ley, la vida personal de los individuos para incidir de modo especial en el propio acontecer de la organización y funcionamiento de la sociedad.»

Por ende, es claro que para el cabal ejercicio del derecho a la personalidad jurídica, la cédula de ciudadanía se convierte en un documento relevante e imprescindible para acreditar la identificación de las personas, y de esta forma garantizar el ejercicio de sus derechos constitucionales (CC T-023-2016).

b) El respeto al debido proceso administrativo.

Como se ha ilustrado en líneas precedentes la importancia de la cédula de ciudadanía en la identificación de las personas, sumado a que es el instrumento idóneo para el ejercicio

¹ CC T-023-2016.

de los derechos civiles y políticos, permite advertir la relevancia que tiene el procedimiento administrativo para modificar, renovar o **cancelar** la cédula de ciudadanía.

En tal sentido, principios constitucionales como el del respeto al debido proceso deben irradiar los trámites asociados con el otorgamiento y cancelación de tales instrumentos, incluyendo eventos en los que exista o se intente incurrir en doble cedulaación, so pena de vulnerar al titular del documento de identidad su derecho a la personalidad jurídica.

En ese sentido, en sentencia T-006-2011, fue estudiado el caso de un ciudadano que interpuso una acción de tutela contra la Registraduría Nacional del Estado Civil, por considerar que esta última le vulneró sus derechos fundamentales al buen nombre, a la personalidad jurídica y al debido proceso, al instante de decidir, por una parte, cancelar su documento de identidad, el cual consignaba su nombre, así como información real y, por otra, dejar vigente la que presentaba datos diferentes y equivocados. En criterio de la encargada de la guarda y supremacía de la norma de normas:

*(...) la cancelación de cédulas en casos de múltiple cedulaación es una competencia que entraña el riesgo de afectar, así sea a causa de un error de buena fe, el derecho a la personalidad jurídica de los ciudadanos. Siendo así las cosas, la pregunta que debe hacerse esta Corte es si ese riesgo de errar y de afectar un derecho fundamental, es un motivo suficiente para concluir que en el trámite de cancelación de cédulas debe respetársele al titular de el o los documentos de identidad, próximos a cancelarse, el derecho al debido proceso, en su dimensión expresamente estatuida del derecho “a ser oído”, según la fórmula de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 8.1., en concordancia con el artículo 93, C.P.) **La respuesta a ese interrogante debe ser afirmativa.***

*Conforme a lo expuesto, la mencionada Colegiatura consideró que al demandante debía serle **respetado el debido proceso permitiéndole contar con una oportunidad para ser oído, más cuando este trámite podía afectar su derecho a la personalidad jurídica.** Por ello, tuteló los derechos al debido proceso y la personalidad jurídica, ordenando a la Registraduría Nacional del Estado Civil adelantar el procedimiento de cancelación de cédulas, concediendo un término al accionante para que fuera oído y allegara los documentos pertinentes, y luego de esto la Registraduría sí podía adoptar la decisión pertinente (CC T-023-2016). (Destacado dentro del texto original)*

2.3. En este asunto, se observa que la accionante pretende, a través de la presente acción de tutela, que la REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL deje sin efectos la Resolución 14507 del 25 de noviembre de 2021 mediante la cual dispuso la anulación de su registro civil de nacimiento y la cancelación de su cédula de ciudadanía, dado que, según alega, no fue notificada de la misma.

Sin embargo, con la contestación allegada por la accionada, se indicó que mediante Resolución No. 9518 del 5 de mayo de 2023, dispuso permitir nuevamente la inscripción del registro civil de nacimiento y restablecer temporalmente su cédula de ciudadanía, por lo que la parte accionante cuenta con la posibilidad de iniciar nuevamente el trámite y allegar la documentación requerida. En efecto el aludido acto administrativo, se dispuso:

En mérito de lo expuesto;

RESUELVEN:

ARTÍCULO PRIMERO: PERMITIR una nueva inscripción de Registro Civil de Nacimiento a la señora **JESSICA ANDREINA CONTRERAS ROJANO** a partir de la

5

Continuación de la Resolución No. 9518 de 95 de mayo de 2023 "Por medio de la cual se permite una inscripción de nacimiento, y se restablece temporalmente la vigencia de la cédula de ciudadanía No. 1043611369"

Página 6 de 6

notificación del presente acto administrativo, conservando en la inscripción el Número Único de Identificación Personal N° **1043611369**, acreditando los requisitos de ley.

PARÁGRAFO PRIMERO: Para inscribir el nacimiento de la señora **JESSICA ANDREINA CONTRERAS ROJANO**, en el Registro Civil del Estado Civil, deberá presentarse a la Registraduría más cercana a su domicilio.

PARÁGRAFO SEGUNDO: El presente acto administrativo no es documento antecedente en la nueva inscripción del Registro Civil, por lo que documento antecedente es el que se especifica en el Decreto 356 de 2017 respecto de los hijos de colombianos nacidos en el extranjero.

ARTÍCULO SEGUNDO: Restablecer temporalmente la vigencia de la cédula de ciudadanía No. **1043611369** a nombre de **JESSICA ANDREINA CONTRERAS ROJANO** en el Archivo Nacional de Identificación, con el fin de que se realice nueva inscripción del Registro Civil de Nacimiento y sea vinculado el NUIP **1043611369**.

PARÁGRAFO PRIMERO: El incumplimiento de lo establecido en el artículo primero en lo que refiere a la nueva inscripción del nacimiento de **JESSICA ANDREINA CONTRERAS ROJANO**, cumplido un (1) mes desde la notificación del presente acto conllevará a la cancelación de la cédula No. **1043611369** a nombre de **JESSICA ANDREINA CONTRERAS ROJANO**, en el Archivo Nacional de Identificación por falsa identidad y automáticamente ser removido del Censo Electoral

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido de la presente Resolución en los términos establecidos en el artículo 66 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).

(Archivo 008 del expediente digital)

Lo anterior permite concluir que, con oportunidad de la interposición de la presente acción y la vinculación de la accionada, las pretensiones de actora fueron atendidas, razón que permite establecer que ha cesado la vulneración a la garantía fundamental invocada, configurándose así la carencia actual de objeto de la tutela por hecho superado, figura respecto de la cual, la Corte Constitucional, ha expresado:

“La jurisprudencia constitucional ha establecido que en caso de que al momento de fallar se advierta que la acción u omisión que dio origen a la pretensión de tutela ha cesado, el pronunciamiento del juez de tutela carece de objeto, pues la amenaza o vulneración de derechos fundamentales que antes se alegaba se torna inexistente. Por tanto, el operador judicial se encuentra ante la imposibilidad de emitir alguna orden en pro de proteger las garantías fundamentales que en principio se consideraron afectadas.

Lo anterior puede ocurrir en tres supuestos, a saber: (i) el hecho superado; (ii) el daño consumado, o (iii) cualquier otra situación que conduzca a que carezca de sentido la orden a dictar para satisfacer la pretensión de la solicitud de tutela.

Al referirse al hecho superado, el Tribunal ha indicado que es aquella situación que se presenta cuando durante el trámite de la tutela o de su revisión, cesa la vulneración o amenaza del derecho que se buscaba proteger con la solicitud de tutela como consecuencia de una actuación por parte del demandado. En consecuencia, el accionante, en principio, ya no tiene interés en la satisfacción de su pretensión pues la causa que motivó la solicitud de tutela ha desaparecido”²

3. CONCLUSIÓN

² Corte Constitucional, sentencia SU453 de 2020.

En estas condiciones la acción promovida deberá negarse en el entendido de que la vulneración ha cesado, al comprobarse la existencia de un hecho superado.

4. DECISIÓN DE PRIMER GRADO

Con fundamento y apoyo en lo dicho, el Juzgado Veinticinco Civil del Circuito de Bogotá D.C., administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

4.1. Negar el amparo solicitado por JESSICA ANDRINA CONTRERAS ROJANO contra REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, por lo expuesto en la parte motiva de esta decisión.

4.2. Notificar este fallo conforme a lo previsto en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

4.3. Remitir las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisión, si esta decisión no es impugnada.

Notifíquese y cúmplase.

El Juez,

LUIS AUGUSTO DUEÑAS BARRETO

ysl

Firmado Por:
Luis Augusto Dueñas Barreto
Juez
Juzgado De Circuito
Civil 025
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **c326dbadaa85a93ff2f6d61c62b7c5e33df34d1a43f56495928b83e89dd4bd66**

Documento generado en 17/05/2023 08:01:34 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:

<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>